**Entre el enraizamiento y las disputas político-técnicas: el gabinete económico del “plan Gelbard” (1973-1974).** Pablo Enrique Garrido (UBA/CONICET – [garridopabloe@gmail.com](mailto:garridopabloe@gmail.com))

**Resumen:** El 25 de mayo de 1973 el peronismo volvía al gobierno luego de dieciocho años de proscripción. El presidente entrante, Héctor Cámpora, y el líder del movimiento, Juan Perón, decidieron poner al frente del Ministerio de Hacienda y Finanzas a José Ber Gelbard, un representante empresarial que no provenía del seno del justicialismo. La presente ponencia analiza la conformación de la cartera, en la que se destacó la presencia de técnicos e intelectuales económicos no peronistas con estrechos vínculos con la Confederación General Económica, pero que también incluyó a figuras con trayectorias disímiles, vinculadas al justicialismo y a otros espacios políticos.

A través de una estrategia eminentemente cualitativa, recurrimos al análisis de entrevistas, testimonios, periódicos y documentos oficiales que nos permiten reconstruir la integración del gabinete económico, algunas de sus modificaciones y las discusiones en las que se vio involucrado desde la asunción de Gelbard hasta su renuncia, en octubre de 1974. Sostenemos que la designación de estos funcionarios constituyó una forma de enraizamiento, en tanto implicó el establecimiento de un canal constante de información y negociación entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil. A su vez, la convivencia de economistas de trayectorias diversas en el seno del ministerio suscitó el establecimiento de disputas político-técnicas que influyeron en el devenir del programa económico del tercer gobierno peronista.

**Introducción**

El 25 de mayo de 1973 el peronismo volvía al gobierno luego de dieciocho años de proscripción, encabezando una amplia coalición político-social que se había expresado electoralmente a través del Frente Justicialista para la Liberación (FREJULI). El presidente entrante, sin embargo, no era Juan Perón, líder del justicialismo cuya participación electoral se había visto impedida por una cláusula impuesta por la dictadura saliente, sino su delegado, Héctor Cámpora. A su vez, José Ber Gelbard, representante empresarial fundador de la Confederación General Económica (CGE), fue designado al frente del Ministerio de Hacienda y Finanzas[[1]](#footnote-1). Tuvo a su cargo la ejecución de un programa bautizado popularmente como “Pacto Social”, que implicaba un compromiso policlasista articulado alrededor del *Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social* (ACN)[[2]](#footnote-2), rubricada por el titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Rucci, el presidente de la CGE, Julio Broner, y por Gelbard, en representación del Estado Nacional. Tanto el ACN, firmado a los pocos días de asumido el gobierno[[3]](#footnote-3), como el *Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional,* presentado en diciembre de 1973, expresaban objetivos alineados con los documentos previos impulsados por la CGT y la CGE durante la etapa final de la dictadura saliente, entre los que se destacaban las *Coincidencias programáticas del plenario de organizaciones sociales y partidos políticos*[[4]](#footnote-4)*.*

Mientras la bibliografía sobre este programa se ha concentrado mayormente en las políticas económicas y sus resultados (Brennan & Rougier, 2013; Canitrot, 1978; Di Tella, 1986; Lázzaro, 2013; Rougier & Fiszbein, 2006; Vitto, 2012), o bien en la participación de las entidades corporativas en el mismo (Sanz Cerbino & Baudino, 2013; Sanz Cerbino & Lissandrello, 2018; Sidicaro, 2002; Torre, 1983), el rol de numerosos funcionarios que se encargaron de aplicarlo ha sido menos abordado, ya que en ese plano la atención se ha centrado mayormente en la figura del ministro Gelbard (Blejmar, 2019; Rein, 1996, 2015; Seoane, 2018), antes que en quienes lo acompañaron en la gestión del ministerio.

Un aporte en ese sentido es el trabajo de Luis Donatello (2017), que relata la trayectoria de quien fuera jefe de asesores del ministerio, Gustavo Caraballo. Ramiro Coviello (2019), por su parte, indagó en la formulación del Plan Trienal y el rol que cumplieron en ese proceso un grupo de técnicos de la CEPAL. A su vez, sobre los economistas vinculados al Partido Justicialista que Gelbard supo cobijar dentro de la cartera, se han destacado los aportes relacionados con sus roles en la primera década de gobiernos peronistas (Belini, 2009; Gerchunoff & Llach, 2007; D. Pereyra & González Bollo, 2020; Rein, 1996; Rougier, 2012), o bien en el período previo al regreso de Perón (Denaday, 2018, 2020).

La presente ponencia, producto de la investigación para la tesis de la maestría en Sociología Económica (EIDAES-UNSAM) del autor, analiza en cambio la integración de la cartera, en la que se destacó la presencia de técnicos e intelectuales no peronistas con estrechos vínculos con la CGE, pero que también incluyó a figuras con trayectorias disímiles, vinculadas al justicialismo y a otros espacios políticos. Para ello, a través de una estrategia eminentemente cualitativa, recurrimos al análisis de entrevistas, testimonios, periódicos y documentos oficiales que nos permiten reconstruir la conformación del gabinete económico, algunas de sus modificaciones, las inserciones político-institucionales de sus miembros y las discusiones en las que se vieron involucrados desde la asunción de Gelbard hasta su renuncia, en octubre de 1974[[5]](#footnote-5).

Es así que, luego de la introducción, presentaremos un breve acápite conceptual centrado en la noción de enraizamiento, para luego detenernos en distintos grupos de funcionarios y técnicos que integraron el ministerio. Nuestra hipótesis consiste en que pueden delimitarse, por lo menos, dos grandes grupos de funcionarios, muchos de ellos fuertemente vinculados con organizaciones corporativas, lo que constituyó un intento por estabilizar una forma de enraizamiento entre el Estado y dichas organizaciones, y que la presencia de actores con trayectorias y pertenencias disímiles motivó que se presentaran disputas político – técnicas alrededor de las medidas a implementar.

**Enraizamiento y disputas. Entre la política, la técnica y los sectores corporativos**

La polisemia que envuelve al concepto de *enraizamiento* en las ciencias sociales resulta útil para abordar nuestro objeto de estudio. En la Nueva Sociología Económica (NSE), el término surgió como parte de la respuesta a la perspectiva de la elección racional sobre la acción, señalando la relación intrínseca entre el actor económico y el entorno social a la hora de tomar decisiones, haciendo referencia a la estructuración social, cultural y política de las decisiones en contextos económicos (Beckert, 2017).

Sin embargo, Peter Evans, en su clásico trabajo *El Estado como problema y como solución*, retomó el concepto para repensar la relación entre actores sociales y económicos: con él, graficaba la existencia de vínculos y canales institucionalizados de comunicación entre el sector público y la sociedad civil. Así, el *enraizamiento* estaría constituido por canales de información en ambos sentidos, pero también de negociación sobre el carácter de las políticas públicas. El autor lo utiliza para sostener una hipótesis sobre los factores necesarios para lograr escenarios desarrollistas: no alcanza con que los aparatos burocráticos estatales tengan una autonomía weberiana en un sentido de aislamiento, deben existir también vínculos con los actores sociales no estatales, es decir, enraizamiento. La propuesta del autor consiste en lograr una “autonomía enraizada” (Evans, 1996). Castellani y Llanpart subrayan que “el enraizamiento permite conocer las inquietudes y requerimientos del sector privado, y al mismo tiempo permite evaluar, controlar y moldear antes y después de su implementación, las reacciones privadas a las iniciativas públicas” (2012, p. 159). Encontramos que es particularmente relevante para abordar estructuraciones como la del Pacto Social, ya que se centra en la relación del Estado con actores económicos a través de canales de diálogo formales o informales, que permiten “la construcción de una relación de reciprocidad y búsqueda de consenso entre las partes, aumentando el grado de eficacia de las intervenciones públicas” (Castellani & Llanpart, 2012, p. 160)[[6]](#footnote-6).

En el caso del Pacto Social, el ministerio encabezado por Gelbard era un lugar clave para pensar el enraizamiento de las políticas gubernamentales: la cartera era la responsable de encabezar las instancias de diálogo tripartitas, mientras que, en cuanto a su integración, desde la cabeza del ministerio hasta numerosos puestos intermedios estaban a cargo de integrantes de la CGE (Blejmar, 2019; Rein, 2015). Ellos habían ideado e impulsado los lineamientos centrales del programa junto a la CGT, y por ello incorporaron también a funcionarios de diálogo fluido con la central gremial. La asignación de ciertos cargos reforzaba de ese modo el vínculo entre el Estado y las entidades corporativas involucradas.

No obstante, la falta de cohesión entre diversas áreas económicas y la discusión sobre la política a aplicar, en ocasiones generó obstáculos para lograr la aplicación de un programa económico coherente. El ejemplo más claro de ello se experimentó en la relación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, encabezados por economistas relacionados con distintos grupos del espacio político gobernante (Di Tella, 1986) que, por momentos, no pudieron acordar en importantes tópicos.

Estas posturas divergentes nos invitan a pensar también sobre los vínculos entre la construcción de conocimiento económico con su contexto de producción, nudo abordado por Marion Fourcade Gourinchas (2001): la autora refuta tanto la neutralidad como la universalidad de los discursos, al sostener que el conocimiento se encuentra inevitablemente relacionado con el marco nacional y las instituciones en las que es producido. Es decir que, al igual que los fenómenos económicos presentados por la NSE, también los discursos sobre la materia están social y políticamente enraizados. Por lo tanto, las disputas de saberes entre estos economistas no pueden leerse sin aprehender el contexto correspondiente: la intervención corporativa en el gabinete económico y un contexto de alta politización invitan a realizar un análisis de las posiciones de estos funcionarios que no dé por sentada una escisión tajante entre técnica y política.

La reflexión sobre la convivencia de esas lógicas diversas ha renacido con vigor en las discusiones académicas del presente, en especial a partir de trabajos que han abordado la relación entre saber técnico y saber político, así como la especialización de las élites estatales en el escenario nacional (Coviello, 2019; Gené, 2011, 2012; Gené et al., 2021; Heredia, 2015; Montaña, 2011; Morresi & Vommaro, 2011; Neiburg & Plotkin, 2004a, 2004b; D. Pereyra & González Bollo, 2020; E. Pereyra, 2012, 2017). Morresi y Vommaro señalan que tanto el surgimiento como la consolidación de estos expertos obedece al mismo tiempo a una lógica técnico-profesional, pero también política. De ese modo, los expertos se desplazan entre el mundo académico, el mundo político-económico y el Estado. A su vez, inspirados en la idea de multiposicionalidad (Boltanski, 1973), hacen hincapié en los expertos como “actores que funcionan en un campo propio que, al mismo tiempo, requiere múltiples pertenencias (el Estado, el sector privado, la sociedad civil, la universidad)” (Morresi & Vommaro, 2011, p. 20). Aún más explícito, el enfoque de Elsa Pereyra (2012, 2017) propone una perspectiva que se centre en evitar una contradicción entre formación especializada y militancia, o entre conocimientos técnicos y políticos: ambos saberes pueden formar parte del repertorio de los mismos actores.

Al mismo tiempo, debates instaurados en las ciencias sociales sobre las formas de “entrada” a la política y el reclutamiento de los agentes estatales se han traducido en la proliferación de aportes de la sociología económica que abordan dichos temas al nivel de los ministerios nacionales (Canelo, 2012; Gené, 2011, 2012; Gené et al., 2021; Perelmiter, 2012). Como señalan Heredia, Gené y Perelmiter, el análisis del accionar del Estado al nivel de los ministerios funciona como una “vía de entrada para dar cuenta de las mediaciones –ministros y equipos de gobierno, pero también dispositivos organizacionales o socio-técnicos– que acompañan a los presidentes, habilitando y constriñendo sus decisiones, e incluso traduciéndolas de modos diversos en políticas públicas” (2021, p.2). En nuestro caso, la cartera económica tomaba una particular centralidad por ser la encargada de encabezar el pacto tripartito. Así, a partir de la idea de que los discursos económicos están enraizados en situaciones políticas y sociales determinadas, abordaremos el análisis del gabinete ministerial. De ese modo, en los apartados siguientes identificamos, al menos, dos grupos diferenciables en cuanto a sus relaciones políticas, experiencias previas de gestión estatal, y la pertenencia a grupos intelectuales y *think tanks* de diverso tenor.

**Un “superministerio” no peronista. El enraizamiento Estado – CGE en la cartera económica.**

*D’Adamo, Leyba y Caraballo.* El primer círculo de colaboradores y la confección de un plan.

En un contexto de fuertes disputas al interior de la coalición gobernante, fundamentalmente marcadas por el clivaje entre sectores que hegemonizaban la Juventud Peronista y la dirigencia sindical que lideraba la CGT, el ministro Gelbard aparecía en una posición peculiar: no era apadrinado por ninguna organización del peronismo, pero se había encargado de afianzar un vínculo personal con Perón, quien, desde el exilio, valoraba positivamente los acercamientos entre sindicalistas y empresarios que se habían coronado con las “Coincidencias programáticas” (Brennan, 1997; Rein, 2015). La imbricación de los discursos volcados en ese documento era clara: había sido redactado por hombres de la CGE y la CGT y parecían reflejar una convergencia de intereses. En cuanto a la conformación de su gabinete, Gelbard también ubicó en los lugares más importantes a hombres vinculados con dichas organizaciones: esta situación facilitó una forma particular de relacionarse entre estas entidades de la sociedad civil y el Estado.

En el círculo más cercano al ministro, predominaron los funcionarios con un pasado vinculado a la CGE, que compartían una serie de características peculiares para funcionarios de un gobierno peronista. Primero, en general no tenían una historia vinculada al Partido Justicialista. Además, a diferencia de intelectuales identificados con ese partido, habían podido desarrollarse profesionalmente en la administración pública durante el período de su proscripción (1955-1973), varios de ellos habían trabajado en el gobierno radical de Arturo Frondizi y, finalmente, habían formado parte del *think tank* corporativo de la CGE, el Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras (IIEF-CGE).

Orlando D’Adamo, Carlos Leyba y Gustavo Caraballo son nombres que se repiten en los relatos como figuras importantes cercanas a Gelbard, tanto en la gestión cotidiana del ministerio como en el proceso de toma de decisiones (Cafiero, 2011; Caraballo, 2007; Leyba, 2010; R. Lavagna, entrevista -AHO-IIGG- 2005). A su vez, las redes vinculares que algunos de ellos habían construido en espacios diversos -profesionales, intelectuales, políticos- se tradujeron, en ocasiones, en nuevos nombramientos en el gabinete económico.

D’Adamo, un ingeniero forestal con intereses empresarios en la industria del azúcar, ocupó la Secretaría de Coordinación y Programación del Ministerio de Economía[[7]](#footnote-7), lo que lo convertía en el segundo hombre más poderoso de la cartera. Tempranamente vinculado a la CGE, su experiencia en el Estado incluía su participación como director de Economía Forestal de la Nación y secretario de la Comisión Nacional de Bosques entre 1953 y 1957: la continuidad luego del golpe de Estado indica que no era percibido como una figura con lazos políticos fuertes con el peronismo. Su participación más relevante había sido como asesor y secretario técnico del gobierno de Arturo Frondizi, ya que durante la década de 1960 se alejó de la gestión pública y se encargó de coordinar los grupos de investigación del IIEF-CGE (Coviello, 2019).

La ascendencia de D’Adamo en el gabinete económico es señalada repetidamente (Cafiero, 2011; Caraballo, 2007; Leyba, 2010). De los testimonios se extrae una valoración tanto de su rol en la gestión diaria de la cartera como de su capacidad técnica, mientras Gelbard era señalado como el encargado de la articulación política. Roberto Lavagna incluso identifica a la conducción económica como “Gelbard – D’Adamo: D’Adamo era el viceministro, y era el ministro en la realidad” (Lavagna, 2005).

También en la prensa del período se puede observar este rol preponderante, no solo acompañando a Gelbard en las actividades más importantes sino también asumiendo funciones propias. De este modo, aparece en distintos momentos del año 1973 encargándose de las explicaciones acerca del programa económico y su marcha frente al presidente y los gobernadores (“La reunión de gobernadores”, 1973), presidiendo el acto de creación de la comisión que monitoreaba precios y salarios en el marco del Pacto Social (“Constituyóse la comisión…”, 1973), e, incluso, como responsable de convocar a entidades corporativas en conflicto con el gobierno (“Convocaron a dirigentes…”, 1973). Durante el año siguiente fue enviado al exterior para viabilizar exportaciones a Cuba (“D’Adamo en Washington”, 1974), y en marzo fue vocero de nuevos acuerdos nacionales tripartitos (“Informe en Olivos”, 1974) y designado al frente del Instituto para la Integración Económica Latinoamericana (“La integración…”, 1974). También supo encargarse de negociaciones por planes de inversión con representantes de Techint (“El plan trienal”, 1974), y anunció la realización de un nuevo censo económico (“Censo económico”, 1974). De todas formas, su pico de exposición lo alcanzó en septiembre de ese año cuando asumió las tareas del ministro, ausente por motivos de salud (“Analizóse…”, 1974; “Reunión en Economía”, 1974).

Los testimonios de Leyba y Caraballo resaltan la figura de D’Adamo incluso desde la “hora cero” en la redacción de las “Coincidencias Programáticas”. El ACN y el Plan Trienal reconocían explícitamente en ese documento un antecedente reciente en la Argentina, pero el programa también era hijo de su tiempo: el éxito de esquemas de pactos sociales en la Europa de la segunda posguerra es reconocido como una importante influencia (Caraballo, 2007; Leyba, 2010). En el aspecto teórico, Leyba recuerda que en la formulación de esta política influyó la obra del economista italiano Luigi Pasinetti, neokeynesiano de la escuela inglesa de Cambridge, que, a su vez, continuaba los estudios de Piero Sraffa sobre la producción conjunta:

La Argentina nunca creció tanto como entre el 63 y el 73. Esa productividad extraordinaria no se distribuyó, porque los salarios reales cayeron, a pesar de que el desempleo había aumentado muy poco; y, en segundo lugar, tampoco hubo una exportación industrial que realizara esa productividad en el mercado. Pasinetti dice que si vos no distribuís el producto de la productividad vía salarios o vía exportaciones, detenés el crecimiento de la economía Porque hay un embolsamiento de *mosca* de alguna manera ¿Por qué voy a aplicar esta productividad que se convirtió en utilidades al ciclo si no tengo salidas? Es así, no tengo salidas por los defectos de la política económica, por la ausencia de la participación del Estado en la exportación, o en la ausencia del Estado en regular la distribución. (Leyba, comunicación personal, 2019)

En consonancia con este diagnóstico, el ACN y el Plan Trienal buscaban aumentar las exportaciones industriales y, a su vez, proyectaban una redistribución progresiva del ingreso. Este último elemento apuntaba a fomentar el consumo interno y a mejorar las ventas de las industrias que ofrecían sus productos en el país, muchas de ellas enroladas en la CGE. Sin embargo, para que creciera la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, se preveía que el salario real creciera por encima de la productividad media de la economía (Vitto, 2012), lo que generaba una contradicción con la CGE, que concentraba entre sus adherentes numerosas organizaciones industriales intensivas en mano de obra, en las que las variaciones salariales impactaban más directamente (Di Tella, 1986). A su vez, la necesidad de fomentar las exportaciones industriales y agrícolas nace de una lectura motivada por las crisis regulares por escasez de divisas, problema propio de la historia nacional que caracterizaba las preocupaciones de los economistas que reflexionaban sobre el desarrollo en las décadas del 60 y 70 (Heredia, 2015). Esta figura era asociada de manera casi unánime a la industrialización: Rougier y Fiszbein señalan que “todos los economistas que participaron del debate de los años sesenta se aproximaban a la formulación de un proyecto nacional de desarrollo en torno a las estrategias para reimpulsar el proceso de industrialización” (2006, p. 18).

Carlos Leyba, el único funcionario de este grupo con formación académica como economista, fue nombrado Subsecretario de Coordinación y Programación, y su rol en la gestión es destacado por diversos relatos (Cafiero, 2011; Caraballo, 2007; Pardo & Frenkel, 2004; Lavagna, 2005). Afiliado al Partido Demócrata Cristiano, había tenido vínculos con la CGT a partir de sus colaboraciones con Hugo Barrionuevo, y había estado a las órdenes de D’Adamo en el instituto de la CGE (Leyba, 2019).

Por su parte, Gustavo Caraballo fue jefe de asesores del Ministerio de Economía, y luego fue nombrado secretario técnico de la Presidencia, por recomendación de Gelbard. Según se interpreten sus relatos, en esa función aparecía como un enlace entre el ministro de Economía y el presidente, o bien como un hombre de confianza de Gelbard que trabajó un año con Perón. Abogado de profesión, había sido funcionario durante el gobierno de Frondizi, y desde entonces se mantuvo en la Administración Pública Nacional. Durante esa primera experiencia en la gestión del gobierno radical conoció a D’Adamo, por cuya recomendación se incorporó al IIEF-CGE en 1965 junto a otros ex funcionarios del gobierno frondizista, como Julio Savón, Saúl Witis, y Horacio Giberti (Caraballo, 2007, p. 65).

Los nombres de ambos aparecen en la prensa vinculados con el Plan Trienal (“Perón habla…”, 1973; “El control de las metas…”, 1974). Sin embargo, mientras Leyba, por su cargo, era mencionado habitualmente en labores junto al secretario de Coordinación, Caraballo, desde la Secretaría Técnica de la Presidencia, podía ser relacionado con una gama de asuntos más amplia, aunque predominaban los económicos, en sintonía con su vínculo estrecho con Gelbard (“Se creó…”, 1974; “Gelbard dijo…”, 1974;“Acerca de la burocracia”, 1974).

D’Adamo, Caraballo y Leyba resultan entonces ejemplos de funcionarios con títulos en disciplinas diversas, cuyas preocupaciones en materia económica habían confluido en un organismo técnico del mundo privado, pero vinculado a una organización corporativa como la CGE, que se había desarrollado con la intención de influir en la agenda de la administración estatal. Técnica y política aparecían así ligadas en los repertorios de estos hombres que no poseían pertenencias partidarias rígidas o dogmáticas, lo que les permitía, en ciertos casos, desempeñarse en gobiernos encabezados por figuras tan disímiles como Frondizi y Cámpora. Lo que tenían en común ambas gestiones es que aparecían como experiencias en las que, al menos a priori, se podían ejecutar planes afines a los impulsados por la CGE. Como señala Donatello (2017), trayectorias de este tipo funcionan como ejemplos para pensar la política como intermediación, en este caso entre sectores corporativos y el Estado.

Sin embargo, la ausencia en el entorno de Gelbard de personajes con trayectoria en el peronismo era un dato relevante en un contexto en el que la coalición oficialista se veía sacudida por una feroz pugna al interior de ese movimiento[[8]](#footnote-8). Luego de la renuncia de Cámpora en julio, el interinato de Lastiri y la posterior asunción presidencial de Perón, la organización del nuevo gobierno, a través de la sanción de la nueva Ley de Ministerios, representaba una oportunidad de afianzar la centralidad de Gelbard en el gabinete, o bien, la posibilidad de quedar subsumido ante funcionarios peronistas que aumentaran sus atribuciones.

Tanto el resultado de ese proceso como ciertos relatos al respecto (Caraballo, 2007; Leyba, 2019) indican que el entorno de Gelbard tuvo incidencia a la hora de estructurar formalmente el gabinete nacional. El Ministerio de Hacienda y Finanzas se reconvertiría en octubre en el Ministerio de Economía, incorporando formalmente nuevas funciones – “la centralización de los rubros referidos a la hacienda, finanzas, industria, comercio, y agro”- que Gelbard había coordinado en la práctica desde el comienzo de su gestión. Así, la prensa señalaba que las dos principales carteras beneficiadas por la nueva ley eran las de Economía y Bienestar Social, al punto de convertirlas en “superministerios” (“Economía y Bienestar Social…”, 1973).

A pesar de ese posicionamiento favorable, Leyba señala que Gelbard no consiguió todos los objetivos que se propuso en ese campo: “quería tener el control total del Ministerio de Economía (…) no pudo ser ministro de Economía y Trabajo. Krieger [Vasena] había sido ministro de Economía y Trabajo[[9]](#footnote-9)” (Leyba, 2019). En cambio, en la cartera laboral asumió el dirigente sindical Ricardo Otero, quien se mostró muy activo en sus primeros días de gestión para disputar el papel de vocero del Pacto Social (Iglesias Rouco, 1973; “El Poder Ejecutivo envió…”, 1973). El peso de la CGT en esa cartera no sería menor para el programa (Sidicaro, 2002; Torre, 1983): desde allí se emprendió la redacción de la nueva Ley de Contrato de Trabajo que incorporaba nuevos derechos para el colectivo trabajador, lo que en algunos casos generaba tensiones con el objetivo del incremento de la productividad (Di Tella, 1986).

De este modo, la conformación del gabinete aparecía como otra forma de enraizamiento entre la sociedad civil y el Estado: en el Ministerio de Economía se priorizaba la vinculación con los empresarios, mientras que en el Ministerio de Trabajo se establecía un sólido vínculo con la CGT.

*Entre la técnica y la política.* La conformación de la cartera económica

El desembarco en la gestión pública ponía a Gelbard ante el desafío de integrar los numerosos cargos que, una vez dictada la Ley de Ministerios, quedarían en la órbita de la cartera económica. Luego de dieciocho años de proscripción, los expertos que no estaban vinculados directamente con el Partido Justicialista se encontraban en una posición ventajosa, ya que muchos de ellos habían tenido experiencias de gestión en el Estado, o se habían podido desarrollar en espacios de investigación legales durante la década de 1960. En cambio, los *think tanks* peronistas habían comenzado a actuar de manera sistemática recién en los años previos al retorno de Perón (Denaday, 2018; Pardo & Frenkel, 2004). La relevancia del IIEF-CGE se vería refrendada por la presencia de funcionarios de nivel intermedio que habían participado allí, o bien tenían vínculos políticos o profesionales con sus referentes.

La Secretaría de Agricultura quedó a cargo de Horacio Giberti, quien había sido entre 1966 y 1971 subdirector del IIEF-CGE, y hasta asumir su cargo era el director de su revista institucional, *Estudios sobre la economía argentina*. Al igual que D’Adamo y Caraballo, había ocupado un lugar relevante durante el gobierno de Frondizi, al frente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre 1958 y 1961, y continuó su experiencia en cargos de la administración pública como Coordinador del Sector Agropecuario del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), consultor del Consejo Federal de Inversiones (CFI) -entre 1963 y 1967-, y posteriormente como director del Banco Nación (1971-1973). Bajo su impulso, la cartera económica alcanzó la firma del acta que sellaba un acuerdo con cámaras del sector, con miras a aumentar la productividad y extender la frontera agropecuaria. Las principales medidas impulsadas por Giberti fueron la suspensión de los desalojos de arrendatarios, la política de regulación de carnes y granos[[10]](#footnote-10), la Ley de Fomento Agrario y el Impuesto a la Renta Potencial Normal de las Explotaciones Agropecuarias, medida de carácter productivista que incrementaba los costos de poseer tierras sin producir (Makler, 2009, 2013).

Sin embargo, su gestión quedaría marcada por el proyecto de Ley Agraria que regulaba el régimen de tenencia y explotación de la tierra y se planteaba como objetivo el aumento de la productividad y la redistribución de las riquezas extraídas de la tierra argentina. El proyecto generaría el rechazo de la Sociedad Rural (SRA) y pedidos de modificaciones de la Federación Agraria (“La ofensiva…”, 1974; “Tensa situación…”, 1974; Baudino & Sanz Cerbino, 2013; Sanz Cerbino & Baudino, 2014). No alcanzaría a tratarse en el Congreso, ya que fue ingresado en septiembre de 1974, cuando Gómez Morales relevaba a Gelbard y desplazaba a Giberti de su puesto, quitándole impulso al proyecto.

Algunas interpretaciones sobre su gestión intentan ubicarlo junto a los sectores de la guerrilla. Carlos Fernández Pardo y Leopoldo Frenkel, vinculados en el período a usinas de pensamiento del justicialismo, sostienen que fue “la visión romántica de la guerrilla ruralista la que vició ideológicamente el problema y (…) arrastró a Giberti, un técnico de reconocido prestigio en estos temas” (Pardo & Frenkel, 2004, p. 188). Sin embargo, esta lectura resulta simplista: de hecho, Giberti no era inmune a las críticas de sectores de izquierda (Garrido, 2022a). A su vez, los proyectos impulsados por la Secretaría en el período seguían los lineamientos de la obra académica previamente desplegada por el secretario (Giberti, 1964, 1966, 1985) e, incluso, el impuesto a la renta potencial de la tierra formaba parte de las “Coincidencias Programáticas”[[11]](#footnote-11).

Por otro lado, aparece como una exageración del poder de un secretario alegar que estos proyectos podían reflejar meramente la relación de Giberti con sectores de izquierda, antes que posicionamientos del ministro. Caraballo sostiene que Gelbard no simpatizaba con una fracción importante del sector agropecuario: “Nunca fue a las exposiciones y ferias anuales de la SRA y aconsejó a todos los ministros no ir (…) Él prefería conversar con el sector de Horacio Volando, la Federación Agraria” (2007, p. 101).

Otro caso de un experto que demostró destrezas políticas surge al analizar la trayectoria de Alberto Davié en el área de Industria, primero con rango de subsecretario, y luego de octubre como secretario de Desarrollo Industrial. También proveniente de la CGE (Rougier & Fiszbein, 2006; Seoane, 2018), Davié exhibía una trayectoria particular: ingeniero de profesión, se había erigido en empresario industrial en la ciudad de Santa Fe (“Se realiza la exposición celebrando el 50 aniversario de la Unión Industrial”, 1973) , y combinaba sus emprendimientos comerciales con sus intereses académicos, al punto de que alcanzó la presidencia del Centro Argentino de Control Automático. También se había desempeñado en importantes cargos de gestión educativa: había sido decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Litoral entre 1958 y 1962 y vicerrector desde 1962 hasta 1965 (*Crónica Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral*, 1962; Jacovkis, 2014), e integrante del Departamento de Industria de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante el decanato de Rolando García – entre 1957 y 1966- (Rodríguez, 2016).

Su prestigio como académico no le impidió tomar rápidamente decisiones políticas de peso en su rol de funcionario: la Secretaría de Desarrollo Industrial fue la primera dependencia del ministerio en aplicar la Ley de Prescindibilidad -una normativa que facilitaba las desvinculaciones laborales en la administración pública-, para separar de sus cargos a ocho directores generales que permanecían desde la gestión del gobierno de facto (“Primeros ocho prescindibles”, 1973). A su vez, tuvo un rol destacado en el fomento de las exportaciones industriales a los países socialistas y, en particular, a Cuba (“Cuba, nuestro principal comprador”, 1974; “Exposición en Cuba”, 1974). En julio de 1974, en una rotación de cargos dentro del ministerio, fue trasladado a la dirección de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, siendo reemplazado en la Secretaría por otro hombre de la CGE, Ernesto Paenza (“Cambios en Economía”, 1974)[[12]](#footnote-12).

En el área de Obras Públicas[[13]](#footnote-13) fue designado Horacio Zubiri. Según el diario *Clarín*, había diseñado la política de transporte para un Plan de Desarrollo Nacional delineado por la CGE (“Obras y servicios públicos”, 1973). Caraballo, en cambio, hace hincapié en su pertenencia al Movimiento de Integración y Desarrollo, que formaba parte del FREJULI. En el período de la administración Frondizi, Zubiri había sido ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires en el gobierno de Oscar Alende[[14]](#footnote-14), y en 1962 fue el candidato oficialista para la vicegobernación (Panella, 2001; Yazbek, 2015). Durante el gobierno de José María Guido, ascendió a ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación[[15]](#footnote-15).

El flamante secretario no fue bien recibido por un sector del peronismo:

La oposición a su persona por sectores combativos de la Juventud que irrumpieron en el edificio de la avenida 9 de julio, entraron a sus oficinas, lo amenazaron, lo llevaron al balcón para tirarlo a la calle intentando colgarlo de los talones, fue un incidente de tal gravedad que ocasionó la primera renuncia de Gelbard ante Cámpora, rechazada. (…) Mereció una comunicación de Gelbard con Perón en España. (Caraballo, 2007, p. 101).

Los diarios del período recogieron el evento con ciertos matices:

Alrededor de las 13 de ayer un grupo de aproximadamente 300 personas entre las que se encontraban miembros de la Agrupación Lealtad a Perón, de Obras Sanitarias de la Nación, representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación y la Asociación de Trabajadores del Estado, y el diputado nacional Miguel Ángel Davico, procedieron a ocupar el edificio del Ministerio de Obras y Servicios Públicos en la Avenida 9 de Julio y Moreno clausurando todas las puertas de acceso. Luego se dirigieron al despacho del subsecretario general ingeniero Horacio J Zubiri (…) y le exigieron al ingeniero Zubiri la presentación de su renuncia. (“Fue ocupado Obras Públicas…”, 1973)

Las diferencias en cuanto a la gravedad de la escena podrían corresponder a que el periodista no hubiera accedido al episodio completo, o bien a los usos propios de la memoria y el paso del tiempo a considerar en estos relatos (Jelin, 2002). De todas formas, a raíz de este episodio Zubiri ofreció su renuncia (“Fue ocupado Obras Públicas…”, 1973), pero fue rechazada por el gobierno. Este caso era un exponente individual de una tendencia: las tomas de edificios públicos y empresas de diversa índole se multiplicaban, poniendo en cuestión la legitimidad del gobierno (Nievas, 1999).

Zubiri se alejó efectivamente del cargo en julio, con la renuncia de Cámpora, aunque es difícil decir si se debió a hechos como el relatado o a las fuertes críticas que los economistas del MID, empezando por el propio Rogelio Frigerio, lanzaban a Gelbard y su programa económico. Su reemplazante fue Julio Savón -con la nueva Ley de Ministerios sería designado secretario de Transportes y Obras Públicas-, otro hombre proveniente de las filas del IIEF-CGE, que también había colaborado con el gobierno de Frondizi (Caraballo, 2007)[[16]](#footnote-16). Se mantendría en el cargo hasta julio de 1974, cuando fue reemplazado por Miguel Revestido (“Cambios en Economía”, 1974).

Respecto a la Ley de Ministerios, Gelbard declaraba que era importante la moderación. “No crear secretarías innecesarias” era el lema del ministro: “Pero hay una que es una novedad (…) que es la de Recursos y Conservación de Ambiente (…) Nosotros le asignamos mucha importancia” (Gelbard, 1973).

Se trataba de la primera secretaría creada especialmente para estos menesteres, pero no resultaba una sorpresa ya que el mismo Perón había expresado sus inquietudes por la ecología en la última etapa de su exilio (Perón, 1972). Finalmente, se denominó Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, y estuvo a cargo de Yolanda Ortiz, licenciada en Química que se convirtió en la primera mujer en tener el rango de secretaria en el Ministerio de Economía (Leyba, 2011), y la primera de esa área en América Latina (Silva Fernández Aldana, s. f.).

Leyba, antiguo militante de la Democracia Cristiana, encuentra en la pertenencia de Ortiz a la misma organización una de las claves para que fuera designada:

Ante la existencia de Yolanda y en función de aquel Congreso de Estocolmo[[17]](#footnote-17), decidimos crear una nueva Secretaría (…) En la figura de Yolanda, que era demócrata cristiana, yo trataba de meter a la gente del partido (…) Yo siempre fui afiliado a la Democracia Cristiana, estaba muy vinculado. Es un partido de cuadros, no tiene militantes, cada uno es independiente. (2019)

Ortiz coincide en la relevancia de su pertenencia partidaria y en la *expertise* en materia ambiental, aunque incorpora la cuestión de género como otro elemento a considerar:

Militaba en la Democracia Cristiana, que estaba unida al FREJULI, así fue que comencé mi relación con el gobierno. Allí, hacia la década del 70, Perón se entera que yo hacía 15 años que estaba trabajando en ambiente. Quería, entonces, una persona que conociera mucho el tema ambiental y que fuera mujer. Y no había nadie. Solo yo.” (Ortiz, 2008 p.91)

Yolanda Ortiz también remarca la relación de las problemáticas ambientales con el Ministerio de Economía en términos de desarrollo sustentable y relaciona la insistencia de Perón en que una mujer ocupara el cargo con la historia del peronismo:

Creo que le había quedado lo de Evita (…) Tanto es así que cuando yo llego, todas las secretarías, grandes secretarías, la de Recursos Hídricos, con el mejor laboratorio hidráulico de Latinoamérica; la de Recursos Naturales Renovables; Parques Nacionales; Flora; Fauna; Bosques; Minería, todas pasaron a ser Subsecretarías de la Secretaría de Ambiente Humano, presidida por una mujer. Era algo fuerte. Todo dependiente del Ministerio de Economía, porque Perón quería conciliar el desarrollo con el medioambiente. (Ortiz, 2008 p.92)

Importantes cargos en el ministerio eran así otorgados a integrantes del FREJULI que no provenían del peronismo. A su vez, Leyba aclara que respetaron a los trabajadores estables del organismo, empleados de planta permanente designados en su mayoría por los gobiernos radicales o militares durante la proscripción del peronismo: “nosotros no tocamos un solo funcionario del Ministerio de Economía, a un solo director nacional, a nadie” (Leyba, 2019)[[18]](#footnote-18).

De hecho, uno de los trabajadores estables del ministerio era un antiguo conocido de Leyba. Junto a Roberto Lavagna habían colaborado en el Centro de Investigaciones Aplicadas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y también como empleados en el área de estadísticas sociales del Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Arturo Illia[[19]](#footnote-19). Lavagna fue designado director nacional de Política de Precios y, simultáneamente, de Distribución del Ingreso. Dejaría el área junto al secretario Miguel Revestido en julio de 1974, cuando ambos fueron trasladados a la Secretaría de Obras Públicas.

Las tres secretarías restantes establecidas por el Decreto 75/1973 -hasta aquí no mencionadas- eran las de Hacienda, Comunicaciones, y Energía. De la primera de ellas quedó a cargo Roberto Lumi, un contador que había integrado el directorio de varias empresas relacionadas con Gelbard, motivo por el cual fue investigado junto al ministro por la comisión bicameral del Congreso abocada al caso ALUAR (*Comisión Bicameral Investigadora Especial de Estudio Contrato Aluar - Estado Nacional*, 1975). Con vasta experiencia en la administración pública, también había ocupado diversos cargos durante la proscripción del peronismo[[20]](#footnote-20). En Comunicaciones, fue designado Delfor Otero, un general de brigada retirado del Ejército, que durante el golpe de Estado de 1966 había sido interventor de la provincia de Tucumán por un breve lapso (Kotler, 2016). Según Seoane (2018), había funcionado como correo entre el ahora ministro y Perón durante la etapa final de su exilio. Finalmente, la secretaría de Energía quedó a cargo de Herminio Sbarra, un ingeniero de larga trayectoria en SEGBA y consultor privado en energía, también cercano a Gelbard, que reemplazó a quien hasta octubre se había desempeñado como subsecretario, Belgrande Magno (Yazbek, 2015).

Al gabinete en el que predominaban los actores no peronistas con fuerte participación de funcionarios que habían pasado por la CGE, y, en algunos casos, por el gobierno radical de Frondizi, se añadía el hecho de que los hombres que permanecieron en la central empresaria fueron de consulta permanente para el gabinete económico, instituyéndose otra vía para el enraizamiento entre el Estado y la organización fundada por Gelbard. El diario *Clarín* relataba que en la primera reunión del equipo económico en el Palacio de Hacienda, además de sus funcionarios más cercanos, estuvieron presentes los miembros de la CGE Julio Broner, Rafael Kohanoff, Manuel Madanes y Ernesto Paenza, los dos últimos también socios comerciales del ministro (“Gelbard reunió…”, 1973). La presencia de Broner se reiteró en la primera reunión formal del gabinete económico (“Primera…”, 1973). A su vez, el testimonio de Caraballo también deja ver que las consultas del gabinete hacia la CGE no eran solo políticas, sino también de corte técnico:

Por ejemplo, cuando se trató de definir el proyecto sobre agentes de empresas extranjeras me dijo Gelbard que me comunicara con el *Tuta* Kohanoff y el Dr. Carlos Garber de la CGE y ambos me dieron un precedente de los Estados Unidos[[21]](#footnote-21) (Caraballo, 2007, p. 87).

Más allá de que en este caso la consulta no le sería útil a Caraballo, la situación muestra cómo, ante un interrogante de tipo técnico-político, Gelbard podía ordenarle consultar primero a su organización empresaria antes que a órganos del Estado.

***El trío justicialista en el ministerio.* Trayectorias peronistas y disputas político – técnicas.**

*Técnicos, políticos y peronistas.* Alfredo Gómez Morales y Miguel Revestido

El gabinete económico constituía entonces una rareza: era, esencialmente, un ministerio no peronista, en el marco del regreso de este espacio político al gobierno luego de dieciocho años de proscripción. Sin embargo, existieron algunas excepciones.

Alfredo Gómez Morales, Miguel Revestido y Antonio Cafiero se distinguían de los funcionarios hasta aquí mencionados por su importante trayectoria en el justicialismo. Si el grupo cercano a Gelbard tenía mayores vínculos con la CGE, el trío justicialista exhibía fluidos vínculos con el movimiento peronista, en particular con las ramas política y sindical. Los rasgos comunes de sus trayectorias eran múltiples: los tres eran contadores y doctores en Economía, habían sido ministros durante los primeros gobiernos peronistas[[22]](#footnote-22), no habían participado en experiencias de gestión estatal durante los dieciocho años de proscripción de su partido, y en 1972 se habían incorporado a la Comisión Asesora del Consejo de Planificación, una usina del pensamiento justicialista creada en 1970 bajo el liderazgo de Roberto Ares -otro integrante del gabinete durante el primer peronismo- y Leopoldo Frenkel, desde la cual habían participado en la formulación de la plataforma del FREJULI (Cafiero, 2011; Pardo & Frenkel, 2004; Rougier & Fiszbein, 2006).

Por otra parte, tanto Cafiero como Gómez Morales habían sido considerados en repetidas ocasiones como posibles incorporaciones para el gabinete nacional durante el gobierno de Lanusse (Denaday, 2020).

A pesar de que habitualmente son mencionados de manera conjunta como los peronistas incorporados al gabinete de Gelbard en puestos relevantes (Coviello, 2019) o “puestos de primer nivel” (Pardo & Frenkel, 2004, p. 156), discutiremos esa premisa. Al menos en principio, ocuparon cargos de diversa jerarquía: mientras que Gómez Morales y Revestido fueron nombrados en puestos de exposición pública, Cafiero, derrotado en las disputas internas del peronismo, iniciaba la gestión de gobierno en un cargo de dudosa relevancia.

A pesar de la desconfianza de Perón hacia los referentes económicos del justicialismo (Caraballo, 2007; Leyba, 2010; Pardo & Frenkel, 2004; Seoane, 2018), el flamante ministro decidió designar a Gómez Morales en el Banco Central. Caraballo se refiere al economista como “un protegido de Gelbard, porque Perón no lo quería nombrar” (2007, p. 145). Leyba (2019) sostiene que “Gelbard lo quería nombrar para tener uno adentro, porque en todo el gabinete no había un solo peronista”. La motivación del ministro aparece entonces como eminentemente política: en un clima de fuerte disputa al interior del movimiento gobernante, esperaba obtener legitimidad en la coalición oficialista con la presencia de estas figuras.

Según una carta transcripta por Seoane, Perón aceptó el nombramiento, elogiando la capacidad técnica del próximo presidente del Banco Central, pero advirtiendo al titular de la CGE: “Lo importante será, sin embargo, que una orientación general de la política a seguir sea también servida desde allí, para lo cual será preciso ponerlo perfectamente en la situación y que opere de acuerdo a lo establecido por ustedes” (2018, p. 255). Desde el entorno de Gelbard veían a Gómez Morales como un hombre de ideas liberales, que abogaba por la apertura de la economía y el descongelamiento de los precios (Caraballo, 2007; Leyba, 2010)[[23]](#footnote-23).

A poco de asumir su cargo, Gómez Morales anunció modificaciones en la política crediticia, de acuerdo a los lineamientos del ACN, facilitando el acceso al crédito para las empresas nacionales (“Nuevas normas…”, 1973). El punto más importante era la modificación de la tasa de interés, a través de la aplicación de reducciones proporcionales según la importancia de los salarios en los costos de las empresas. Era un reclamo de larga data de la CGE, pero, según Rougier y Fiszbein (2006, p.74), aunque la organización patronal exigía una reducción mayor, el nuevo presidente del Banco Central se opuso, iniciando un camino de rispideces entre esta entidad y la política de Gelbard[[24]](#footnote-24).

Sin embargo, el desacuerdo principal se ubicó alrededor del tipo de cambio. El gabinete económico pretendía incorporar el *crawling peg*, la modificación en línea con el avance de la inflación para, de acuerdo a los términos del ACN, evitar la apreciación injustificada del peso:

Estaban todos los funcionarios sentados ahí, los sindicalistas, los empresarios. Nosotros queríamos establecer el *crawling peg* (…) [Gómez Morales] se puso como loco. Vos pensá que en ese momento nosotros teníamos cierto respeto personal. Nosotros éramos mucho más chicos y él era un prócer del pasado. Y bueno, nos impidió ponerlo. No había mucho tiempo, estábamos ahí, así que no lo pusimos. Teníamos el *crawling peg* y lo sacó. Y después, con Roberto Lowenstein, director de Política Monetaria, viajamos al FMI, en el mes de diciembre del 73, y volvimos con la decisión de devaluar, no porque el Fondo lo hubiera dicho, sino por una discusión de la información. Y desde entonces y hasta que renuncia Gómez Morales, nuestra lucha fue por devaluar. Nosotros queríamos devaluar y él no nos dejaba. (Leyba, 2019)

Los efectos más drásticos de mantener un tipo de cambio fijo se produjeron a partir de finales de 1973, cuando, luego de los primeros meses en que el Pacto Social mostró resultados positivos, la inflación repuntó y comenzó la apreciación de la moneda nacional, en un contexto en el que ya se había iniciado la crisis del petróleo. En el segundo trimestre de 1974, los términos de intercambio del comercio exterior alcanzaron su punto más bajo del período, la balanza comercial empeoraba de manera progresiva por la sobrevaluación del peso y los requerimientos de importaciones de la industria, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el clandestino aumentaba, y el Banco Central comenzaba a perder reservas de manera sostenida. Aun ante el empeoramiento de estas variables, a finales de julio Gómez Morales afirmaba que “no existe la menor posibilidad de que haya una devaluación” (“¿Cambios en Economía?”, 1974, p. 12). De manera sistemática sostenía que la devaluación no era una herramienta útil (Rougier & Fiszbein, 2006, p. 89).

En un momento de dificultades para el Banco Central y en un contexto de desacuerdo con el gabinete económico, no solo por las decisiones monetarias sino también alrededor de la conveniencia de la emisión de nuevos bonos (Leyba, 2010), Gómez Morales se retiró del Banco Central en septiembre de 1974. Sin embargo, pocas semanas más tarde se convertiría en el relevo de Gelbard en el ministerio de Economía, gestión en la cual sí produciría una devaluación de la moneda.

Miguel Revestido, otro exministro del primer peronismo, fue designado en junio de 1973 al frente de la Subsecretaría de Comercio, que, mediante la nueva legislación, poco tiempo después se convirtió en secretaría. El puesto era el de mayor exposición que alcanzaría un funcionario peronista en el gabinete económico de este período, especialmente por tratarse del responsable de controlar los precios y el abastecimiento en el marco del Pacto Social. El diario *La Nación* reseñaba que la primera dificultad que encontraba en ese cargo era “la carencia de la infraestructura necesaria para encarar una tarea como la encomendada”, y el primer objetivo definido por esa repartición fue la eliminación de la intermediación innecesaria en los circuitos comerciales (“Fue firmado el acuerdo social”, 1973, p. 1).

Revestido aprovechó rápidamente su pertenencia al justicialismo para involucrar en sus tareas a los sindicatos: el control de precios y abastecimiento fue un rubro en el que se evidenció, al menos al principio de la gestión, una forma activa de coordinación entre el Ministerio de Economía y la CGT, consolidando formas de enraizamiento. El 9 de junio, el subsecretario anunciaba: “actuará en el control de precios el pueblo organizado a través de la CGT, de sus sindicatos, de sus organizaciones políticas” (“Se congelaron precios…”, 1973, p. 1). Pocos días más tarde, se reafirmaba esta postura con el anuncio de la participación de la CGT en los operativos de control de precios y abastecimiento en los mercados de carne (“Colaborará la CGT”, 1973).

Junio fue el mes más exitoso para el equipo de Revestido, ya que, producto de la definición de precios máximos -incluyendo la obligatoriedad de retrotraerlos en determinados rubros-, la inflación resultó negativa. Sin embargo, a finales de 1973, y, en particular, entrado el año 1974, se convirtió en el área más conflictiva del gabinete, ante un escenario de aumento de precios, desabastecimiento de diversos productos, y la proliferación de variados mercados paralelos ilegales que buscaban eludir los precios máximos. Todo ello en un contexto de apreciación cambiaria, alteración de los precios relativos de la economía, e “inflación importada” producto de la crisis del petróleo y el aumento de precio de los hidrocarburos (Vitto, 2012). Además, Revestido asumió también la intervención de la Junta Nacional de Carnes, en una situación en la que restricciones impuestas por la Comunidad Económica Europea dificultaban su exportación (“Cuentagotas”, 1973).

Rougier y Fiszbein (2006, pp. 83–84) señalan a su vez ciertas discordancias entre las posturas del entorno de Gelbard y la secretaría conducida por Revestido: mientras el ministro proponía ajustes graduales de precios, se encontraba con cierta inflexibilidad en el secretario. Lavagna, por otro lado, recuerda la incomodidad que sentían desde la Secretaría de Comercio por lo que consideraban incongruencias entre la política de precios y una laxitud en la política fiscal y monetaria, que se expresaba en cierta generosidad del ministro con sectores empresarios: “era una época donde cada sector pasaba a verlo a Gelbard y sacaba un crédito” (Lavagna, 2005).

La articulación para el control de precios con sectores con los cuales Revestido compartía militancia en el justicialismo y la postura divergente con respecto a Gelbard en materia de aumentos de precios muestran a un experto con posturas definidas respecto de un tema técnico específico, pero que al mismo tiempo sabía desempeñarse políticamente con actores que no necesariamente compartían el terreno de la técnica como espacio de disputa. La situación conflictiva se resolvería con la salida de Revestido del área de Comercio en julio de 1974, luego de la muerte de Perón. Lavagna, que corrió la misma suerte, afirma que el hecho ocurrió a partir de la presentación de sus renuncias: “cuando fallece Perón, yo le dije a Revestido –me había convertido en su principal colaborador- que yo me iba, que si la política era inviable antes, era dos veces inviable con la pérdida del poder político” (Lavagna, 2005). Ambos fueron reubicados dentro del ministerio, como secretario y subsecretario de Obras Públicas, un área menos urgida de soluciones inmediatas. Sin embargo, el secretario de Comercio que llegaba para relevarlos era otro funcionario de larga trayectoria en el justicialismo.

*El peso del nombre o el peso del cargo.* Antonio Cafiero.

Antonio Cafiero tenía un pasado en común con Gómez Morales y Revestido, tanto por su rol en tanto funcionario en la primera década de gobierno peronista, como por su exclusión del Estado durante la proscripción. Sin embargo, durante esos dieciocho años, había tenido mayor participación en los intentos de rearmados partidarios, siempre cercano a los sectores sindicales (Cafiero, 2011, p. 260).

Su vínculo con el sindicalismo se había afianzado en los inicios de la década del setenta, cuando el liderazgo de José Rucci reemplazó al fallecido Vandor: “[Rucci] me convirtió en su asesor directo y fuimos amigos. Muchas de las solicitadas y comunicados que sacaba en aquel momento la CGT fueron redactadas por mí a pedido de Rucci” (Cafiero, 2011, p. 37). Incluso, Cafiero recuerda el pedido del dirigente sindical para que se acercara al equipo de Gelbard: “Cuando se comenzó a elaborar el pacto social con la CGT, Rucci me designó para actuar como una suerte de bisagra entre la organización gremial y los sectores que Gelbard representaba. Yo trabajé activamente en esa tarea” (2011, p. 279).

Abal Medina confirma la relación al señalar que, de cara a las elecciones presidenciales de marzo de 1973, los sectores sindicales tenían un candidato presidencial alternativo para el peronismo: “El sindicalismo quería que fuera candidato Antonio Cafiero. Fundamentalmente el sindicalismo de la UOM, Rucci y Lorenzo” (Abal Medina, entrevista -AHO-IIGG- 2005). A pesar de llegar con estos apoyos, no solo no fue candidato, sino que no fue tenido en cuenta para el gabinete. Los testimonios apuntan a que la causa fue un supuesto acercamiento a Lanusse[[25]](#footnote-25).

De un modo similar al caso de Gómez Morales, la llegada de Cafiero al área de Gelbard podría ser leída como un intento de aportar cierto peronismo a su gabinete, de cara a las fuertes disputas políticas del período. Sin embargo, el cargo de presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro era muy inferior al otorgado a los otros dos dirigentes del peronismo. Leyba (2019) recuerda que, si bien en el organigrama del ministerio Cafiero estaba bajo sus órdenes, ni siquiera dependía directamente de él, sino del director de Política Monetaria, Roberto Lowenstein, cuyo jefe sí era Leyba. El testimonio del propio Cafiero da cuenta de su reacción después de conocer el gabinete ministerial:

Pensé que estaba lisa y llanamente ‘tachado’ para ser nombrado en un cargo relevante en el nuevo Gobierno, me sentí poco menos que en ‘disponibilidad’. Así estaba cuando José Gelbard, entonces ministro de economía, me llamó para ofrecerme la presidencia de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (…)

En un principio quise rechazar la oferta de Gelbard: le comenté que ello significaba aceptar mi decadencia política. En pocos meses había pasado de precandidato a la presidencia de la nación a titular de una institución bancaria que jugaba en la “C”. (Cafiero, 2011, p. 290)

Tanto el hecho de que entre el puesto de Cafiero y el ministro existieran jerárquicamente tres jefes intermedios en el organigrama, como la definición de la organización que iba a presidir como una institución de tercera categoría, nos indican que el lugar que le era asignado no era de una relevancia similar al de los otros dos justicialistas del ministerio. En este caso, contra los relatos que mencionan a tres peronistas en el gabinete con puestos importantes, sostenemos que, al menos en el inicio de la gestión, en verdad fueron dos: en el caso de Cafiero, el peso de su trayectoria y su vínculo con el sindicalismo le daban más relevancia política a su persona que el cargo que ocupaba. La situación quedó graficada cuando fue el propio presidente Cámpora quien lo invitó a la Casa Rosada para ofrecerle formalmente un puesto de escasa relevancia nacional (“Cafiero presidirá…”, 1973).

Recién cuando fue designado secretario de Comercio en lugar de Revestido, Cafiero alcanzó un lugar más relevante en la cartera. El reemplazo en ese organismo de un hombre cercano al sindicalismo por otro con vínculos aún más fuertes con esos sectores tenía una lógica dentro del pacto tripartito: el mayor interés de los trabajadores en el programa era que los precios no se dispararan, para preservar su poder adquisitivo. De otro modo, comenzarían los reclamos salariales y el ciclo de puja distributiva. A partir de esa lectura, era importante mantener a la Secretaría de Comercio como el espacio privilegiado dentro del Ministerio de Economía para buscar el enraizamiento entre el Estado y la organización sindical.

No obstante, la gestión de Cafiero fue muy breve. Rougier y Fiszbein (2006) afirman que la fugacidad se debió a la propuesta del flamante secretario de transformar su organismo en un nuevo Ministerio de Comercio e Industria, lo que hubiera significado un recorte de poder para Gelbard. Cafiero, en cambio, testimonia que, ante un cargo que implicaba una serie de problemas importantes -reglamentaciones contradictorias, la proliferación de mercados ilegales que evadían los precios máximos, reclamos empresarios por falta de rentabilidad, y un “sistema de congelamiento de precios que no daba para más” (Cafiero, 2011, p. 294)- aceptó un nuevo cargo en el interior del país.

En cualquier caso, veintidós días después de llegar a la Secretaría de Comercio, Cafiero asumió como interventor federal de la provincia de Mendoza (Servetto, 2011). Enfrentado con los otros peronistas de su gabinete, Gelbard tardó en encontrar un reemplazo, por lo que, durante dos semanas de agosto de 1974, Cafiero retuvo el cargo en simultáneo con su función de interventor en una provincia ubicada a mil kilómetros de la sede del ministerio. Recién a finales de ese mes, el ministro decidió que el secretario de Desarrollo Industrial, Ernesto Paenza, asumiera sus tareas (“Paenza reemplazará a Cafiero”, 1974). El paso de Cafiero por el gabinete de Gelbard había sido el menos relevante entre los personajes justicialistas.

**Conclusiones**

La muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, significó para el equipo de Gelbard la pérdida de su principal respaldo político. En un contexto en el que el programa económico mostraba problemas para controlar la inflación y el desabastecimiento, y la disputa al interior del peronismo alcanzaba su punto cúlmine, Gelbard presentó su renuncia el 21 de octubre de 1974.

Durante el año y medio que fue ministro nacional, Gelbard estructuró un equipo económico en el cual la mayoría de los funcionarios poseían una serie de características comunes: sin fuertes ligazones con el peronismo, entre 1955 y 1973 habían desarrollado sus actividades técnicas e intelectuales en condiciones de relativa normalidad, incluyendo su desempeño profesional en áreas del Estado y el sector privado. Además, muchos de ellos habían formado parte del gobierno radical de Arturo Frondizi, y participado en el IIEF-CGE. D’Adamo, Leyba y Caraballo fueron exponentes de esta tendencia que se replicaba en la mayor parte de las secretarías de una cartera fortalecida por la nueva legislación, hasta el punto de ser bautizada como “superministerio”. Es así que, dentro del esquema tripartito, el equipo económico privilegió el vínculo con la CGE, articulando formas de enraizamiento que combinaban prácticas institucionalizadas con otros contactos de tipo informal.

Los escasos referentes económicos del peronismo que fueron designados se distinguían del primer grupo. Los tres habían sido ministros de Perón, motivo por el cual entre 1955 y 1973 no tuvieron lugar para participar de la gestión estatal, y tuvieron inconvenientes para generar espacios profesionales vinculados al ilegalizado movimiento peronista. Recién cerca del final del período se incorporaron en conjunto a una usina de pensamiento de extracción diferente al IIEF-CGE: el Consejo de Planificación del Movimiento Nacional Justicialista. A su vez, sus relaciones primarias no eran con sectores empresarios, sino con los actores clásicos del justicialismo, lo que permitió que, en algunos rubros, como el control de precios, articularan políticas con el sindicalismo. También encontramos que, a diferencia de lo afirmado por bibliografía previa, existió una diferencia de jerarquía entre los lugares que ellos ocuparon en el gabinete.

La convivencia entre estos dos tipos de funcionarios de trayectorias tan disímiles no estuvo exenta de controversias. En el caso del Banco Central, se reflejaron en desacuerdos sobre la política cambiaria y en la definición de tasas de interés no tan generosas como las solicitadas por los empresarios; mientras que en el área de Comercio las tensiones giraron alrededor de la regulación de los precios. De todas formas, la experiencia analizada requiere evitar las distinciones tajantes entre intelectuales políticamente comprometidos y expertos guiados por la racionalidad técnica. Ambos grupos se nutrían de actores que desplegaban tanto saberes técnicos como destrezas para la intervención política.

Futuras investigaciones podrán profundizar al respecto de la relación del gabinete económico con sectores empresarios no representados por la CGE -por caso, la Sociedad Rural- y sus referentes intelectuales en materia económica. A su vez, resta explorar el vínculo de la cartera con los economistas vinculados a la coalición política de gobierno que no tuvieron lugar en el ministerio: en ese campo, resulta particularmente atrayente la polémica entre Gelbard y Rogelio Frigerio, referente del MID.

En definitiva, el análisis de la conformación del gabinete que implementó el Pacto Social y la dinámica a su interior iluminan la experiencia de una cartera que resultaba central para buscar establecer una forma particular de enraizamiento entre el Estado y la sociedad civil. En ese sentido, Gelbard priorizó sus vínculos con los sectores empresarios, sin excluir por ello a economistas que le permitían mantener buenas relaciones con el sindicalismo peronista. Sin embargo, esta estructuración no logró desatar un nudo gordiano que involucraba una situación económica que se deterioraba y un convulsionado contexto político. En cambio, luego de su renuncia, su reemplazante sería precisamente uno de los referentes justicialistas a los que había incorporado: el 21 de octubre de 1974 se iniciaba la gestión de Gómez Morales como ministro de Economía.

**Fuentes y bibliografía**

**Fuentes de prensa**

¿Cambios en Economía? (1974, julio 31). *Noticias*, 12.

Acerca de la burocracia. (1974, marzo 13). *Noticias*, 13.

Analizóse la actual situación económica. (1974, septiembre 19). *El Litoral*, 1.

Argentina impotente. (1973, agosto). *Militancia n°12*, 40–41.

Cafiero presidirá la Caja de Ahorro. (1973, junio 7). *La Nación*, 11.

Cambios en Economía. (1974, julio 24). *Noticias*, 13.

Censo económico. (1974, julio 17). *Noticias*, 13.

Colaborará la CGT en un operativo de control de carnes. (1973, julio 1). *La Opinión*, 12.

Constituyóse la comisión de precios e ingresos. (1973, junio 14). *La Nación*, 12.

Continúa aún en estudio el acuerdo social. (1973, junio 5). *La Nación, 1.*

Convocaron a dirigentes agropecuarios. (1973, septiembre 5). *El Litoral*, 2.

Cuba, nuestro principal comprador. (1974, julio 10). *Noticias*, 11.

Cuentagotas. (1973a, noviembre 25). *Noticias*, 12.

D’Adamo en Washington. (1974, marzo 6). *Noticias*, 24.

Economía y Bienestar Social vuelven a un nivel virtual de superministerios. (1973, julio 12). *La Opinión*, 10.

El caso Gelbard. (1973, octubre). *Militancia n°20*, 26–30.

El control de las metas del plan trienal. (1974, septiembre 16). *El Litoral*, 1.

El plan trienal. (1974, abril 26). *Noticias*, 12.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso 20 leyes de reforma económica. (1973, junio 19). *La Opinión*, 1.

Exposición en Cuba. (1974, junio 20). *Noticias*, 9.

Fue firmado el acuerdo social. (1973, junio 7). *La Nación*, 1.

Fue ocupado Obras Públicas y renunció el Ingeniero Zubiri. (1973, junio 15). *La Prensa*, 1.

Gelbard dijo que habrá aguinaldo doble. (1974, junio 29). Noticias, 8.

Gelbard, J. (1973). Sergio Villaroel entrevista al ministro de Economía José Gelbard. https://www.youtube.com/watch?v=nQHPrhGLGnc

Gelbard reunió a sus colaboradores. (1973, mayo 26). Clarín, 12.

Iglesias Rouco, J. (1973, junio 13).

Informe en Olivos. (1974, marzo 22). Noticias, 24.

La integración Latinoamericana. (1974, abril 22). Noticias, 24.

La ofensiva de los dueños de la tierra. (1974, julio 31). Noticias, 11.

La reunión de gobernadores. (1973, junio 2). La Nación, 1.

Nuevas normas sobre política crediticia. (1973, junio 14). La Prensa, 1.

Obras y servicios públicos. (1973, mayo 25). Clarín, 22.

Paenza reemplazará a Cafiero. (1974, agosto 26). Noticias, 24.

Perón habla el 17. (1973, diciembre 12). Noticias, 10.

Primera reunión del equipo económico. (1973, junio 5). La Nación, 7.

Primeros ocho prescindibles. (1973, diciembre 23). Noticias, 12.

Principales proposiciones incluidas en el acuerdo. (1973, junio 9). La Nación, 1.

Reunión en Economía. (1974, octubre 7). El Litoral, 1.

Se congelaron precios de artículos esenciales. (1973, junio 10). La Prensa, 1.

Se creó una comisión. (1974, enero 9). Noticias, 9.

Se realiza la exposición celebrando el 50 aniversario de la Unión Industrial. (1973, agosto 12). El Litoral, 4.

Semillas de soja en avión. (1973, noviembre 24). Noticias, 7.

Tensa situación entre Gelbard y los agropecuarios. (1974, julio 18). Noticias, 10.

**Entrevistas y testimonios orales**

Abal Medina, J.M. (2005). Entrevista a J.M. Abal Medina. Red de Archivos Orales de la Argentina Contemporánea. Buenos Aires.

Lavagna, R. (2005). Entrevista a R. Lavagna. Red de Archivos Orales de la Argentina Contemporánea. Buenos Aires.

Leyba, C. (abril de 2019). Comunicación personal con el autor.

Ortiz, Y. (2008). Entrevista a Yolanda Ortiz. En Paula Wagner y Guido Perrone, “Los medios siempre toman la catástrofe ambiental, nunca la otra parte”. *Conversaciones*, n°64.

**Bibliografía**

Acta de Compromiso Nacional. (1973). En *Plan Trienal para la Liberación y la Reconstrucción Nacional*. Poder Ejecutivo Nacional - República Argentina.

Beckert, J. (2017). Sociología Económica y enraizamiento:¿ Cómo conceptualizar la acción económica? *Papeles de Trabajo*, *11*(20).

Belini, C. (2009). *La industria peronista: 1946-1955: políticas públicas y cambio estructural*. edhasa Buenos Aires.

Belini, C. (2014). Inflación, recesión y desequilibrio externo. La crisis de 1952, el plan de estabilización de Gómez Morales y los dilemas de la economía peronista. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, *40*.

Blejmar, J. (2019). *José Ber Gelbard: la patria desde el boliche*. Ediciones UNGS, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Boltanski, L. (1973). L’espace positionnel. Multiplicité des positions institutionnelles et habitus de classe. *Revue française de sociologie*, 3–26.

Brennan, J. (1997). Industriales y bolicheros: la actividad económica y la alianza populista peronista, 1943-1976. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. Tercera serie*, *15*.

Brennan, J., & Rougier, M. (2013). *Perón y la burguesía argentina: El proyecto de un capitalismo nacional y sus límites,(1964-1976)*. Lenguaje Claro Editora.

Cafiero, A. (1973). *Carta a Juan Domingo Perón*.

Cafiero, A. (2011). *Militancia sin tiempo: mi vida en el peronismo*. Planeta.

Canelo, P. (2012). ‘Un ministerio de tercera línea’. Transformaciones en el reclutamiento y las trayectorias de los Ministros de Defensa argentinos. *Revista Polhis*, *5*, 319–329.

Canitrot, A. (1978). *La viabilidad económica de la democracia: un análisis de la experiencia peronista 1973-1976*. Cedes.

Caraballo, G. (2007). *Tras las bambalinas del poder*. Corregidor.

Castellani, A. (2006). *Estado, empresas y empresarios. La relación entre intervención económica estatal, difusión de ámbitos privilegiados de acumulación y desempeño de las grandes firmas privadas. Argentina 1966-1989*. UBA.

Castellani, A., & Llanpart, F. (2012). Debates en torno a la calidad de la intervención estatal. *Papeles de trabajo: La revista electrónica del IDAES*, *6*(9), 155–177.

*Comisión Bicameral Investigadora Especial de Estudio Contrato Aluar - Estado Nacional*. (1975). Imprenta del Congreso.

Coviello, R. (2019). “ Expertise y confianza”: los expertos de la CEPAL en el tercer gobierno peronista (1973-1976). *Sociohistórica*.

*Crónica Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral* (pp. 289–290). (1962). https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/bitstream/handle/11185/4223/RU053\_16\_CronicaUniversitaria.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Denaday, J. P. (2018). *No todo fue violencia: un think tank en el retorno de Perón: el caso del Consejo de Planificación del Movimiento Nacional Justicialista (1970-1973)*.

Denaday, J. P. (2020). La fallida incorporación de los economistas peronistas y el fracaso del GAN. *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, 419–427.

Di Tella, G. (1986). Perón-Perón 1973-1976, Hyspamérica. En *Bs. As*.

Donatello, L. M. (2017). *La política como intermediación: la trayectoria estatal de Gustavo Caraballo entre 1958 y 1975 dentro de la Presidencia de la Nación*.

Donatello, L. M., & Obradovich, G. (2020). Los titulares de las carteras de Industria en la Argentina y Brasil, en las experiencias kirchnerista y del PT. Enraizamiento, autonomía y experticia. *Miríada: Investigación en Ciencias Sociales*, *12*(16), 55–75.

Evans, P. (1996). El Estado como problema y como solución. *Desarrollo económico*, 529–562.

Fourcade-Gourinchas, M. (2001). Politics, institutional structures, and the rise of economics: A comparative study. *Theory and society*, *30*(3), 397–447.

García, A. (2018a). Auge y caída de la planificación regional en Argentina: entre la búsqueda de una autonomía enraizada y el escenario económico del capitalismo periférico (1965-2015). *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, *27*(1), 180–194.

García, A. (2018b). Brechas de capacidad y ¿autonomía enraizada?: la experiencia del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable, ProFeder (Argentina, 2003-2016). *Revista Política e Planejamento egional*, *5*(2), 216–240.

Garrido, P. E. (2022a). *¿Responsabilidad de todos? Posiciones y conflictos alrededor del “Pacto Social” durante el tercer gobierno peronista (1973-1974)*. IDAES-UNSAM.

Garrido, P. E. (2022b). Cafiero, Antonio Federico. En R. Rein et al (Comps.), *Diccionario del peronismo 1955-1969 (segunda entrega). Trayectorias, hechos, procesos, organizaciones, correspondencia, publicaciones periódicas y libros de una época.*

Gené, M. (2011). En torno a los profesionales de la política. Trayectorias, prácticas y destrezas en el ejercicio del poder político desde el estado. *Revista Perspectivas de Políticas Públicas*, *1*(1), 85–107.

Gené, M. (2012). Prácticas, destrezas y códigos del trabajo político en democracia: una aproximación desde el Ministerio del Interior en Argentina. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, *57*(215), 71–96.

Gené, M., Heredia, M., & Perelmiter, L. (2021). El carácter múltiple de la racionalidad estatal: ministerios, funcionarios y desafíos de gobierno en la Argentina. *Sociohistórica*, *48*, 139.

Gerchunoff, P., & Llach, L. (2007). *El ciclo de la ilusión y el desencanto: un siglo de políticas económicas argentinas*. Emecé.

Giberti, H. (1964). El desarrollo agrario argentino. *Eudeba, Buenos Aires*.

Giberti, H. (1966). Uso racional de los factores directos de la producción agraria. *Desarrollo Económico*, 17–55.

Giberti, H. (1985). *Historia económica de la ganadería argentina*. Hyspamérica Buenos Aires.

Heredia, M. (2015). *Cuando los economistas alcanzaron el poder.* Siglo XXI Editores.

Jacovkis, P. (2014). Manuel Sadosky y su impacto en la ciencia y la política argentina. En R. Carnota & C. Borches (Eds.), *Manuel Sadosky. El sabio de la tribu.* (pp. 17–83). Libros del Zorzal.

James, D. (2004). *Doña María: historia de vida, memoria e identidad política*. Ediciones Manantial.

Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria* (Vol. 1). Siglo XXI de España editores.

Kotler, R. I. (2016). La defensa del Comedor estudiantil en la Universidad Nacional de Tucumán. De los Tucumanazos a la última dictadura (1969–1976). *Historia, voces y memoria*, *10*, 9–20.

Lázzaro, S. B. (2013). Acuerdos y confrontaciones: la política agraria peronista en el marco del Pacto Social. *Historia Crítica*, *51*, 145–168. https://doi.org/10.7440/histcrit51.2013.07

Leyba, C. (2010). *Economía y política en el tercer gobierno de Perón*. Biblos.

Librandi, J., & Di Marco, M. (2014). Autonomía enraizada y viabilidad de las políticas públicas: el caso del plan AHI en la Provincia de Buenos Aires. *XI Congreso Argentino de Antropología Social*. https://cdsa.aacademica.org/000-081/665.pdf

Makler, C. A. (2009). Horacio CE Giberti: la pluma como arma (1918-2009). *Mundo agrario*, *10*(19).

Makler, C. A. (2013). *El episodio de Olavarría*. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires.

Ministerio de Obras Públicas. (1960). *Vialidad. Revista de la Direcciónn de Vialidad*.

Montaña, M. J. (2011). La Gran Transformación O la borrosa frontera entre política y economía en la Argentina neoliberal. *Investigación y reflexión en Ciencias Sociales Univ Nac General Sarmiento*.

Morresi, S., & Vommaro, G. (2011). *Saber lo que se hace: expertos y política en Argentina*. Prometeo Libros.

Neiburg, F., & Plotkin, M. Ben. (2004a). *Intelectuales y expertos*. Paidós Buenos Aires.

Neiburg, F., & Plotkin, M. (2004b). Los economistas. El Instituto Torcuato Di Tella y las nuevas elites estatales en los años sesenta. En C. Neiburg F y Plotkin M (Ed.), *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina.* Paidós.

Nievas, F. (1999). Cámpora: primavera-otoño. Las tomas. *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*, 351–393.

Obradovich, G., & Donatello, L. M. (2018). Los secretarios de la industria durante el kirchnnerismo. Enraizamiento, autonomía y experticia. *Sudamérica: Revista de Ciencias Sociales*, *8*, 195–213.

Panella, C. (2001). Política bonaerense y gestiones gubernativas, 1943-2001. *Barreneche, Osvaldo-Director/a; Autor (es) Gonnet Lugar Edhasa UNIPE*, 89.

Pardo, C. A. F., & Frenkel, L. (2004). *Perón: la unidad nacional entre el conflicto y la reconstrucción, 1971-1974* (Vol. 1). Ediciones del Copista.

Perelmiter, L. (2012). La constitución de una autoridad plebeya. El ministerio ‘de la pobreza’en la Argentina reciente. *Revista Polhis*, *5*, 309–318.

Pereyra, D., & González Bollo, H. (2020). *Estado y planificación en el lejano sur. Agencias y funcionarios de la Argentina peronista*. Universidad Nacional de Quilmes.

Pereyra, E. (2012). El Estado y la Administración Pública nacional en perspectiva histórica. Análisis crítico de la producción académica sobre el período 1930-1976. *Pol-His.: Boletín Bibl Electr del Prog Bs As de Historia Política*, *5*(9), 92–112.

Pereyra, E. (2017). *Trayectorias y saberes en la provincia de Buenos Aires: el equipo del ministerio de Economía (1987-2007)*.

Perón, J. D. (1972). Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo.

Rein, R. (1996). Reconsiderando el concepto y el papel de la ‘segunda línea’del liderazgo peronista. *Melón Pirro, JC y Quiroga, NF (Compiladores)​ El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre*, 55–78.

Rein, R. (2015). *Los muchachos peronistas judíos: los argentinos judíos y el apoyo al justicialismo*. Sudamericana.

Rodríguez, L. G. (2016). La “subversión científica” en las universidades de Argentina e Hispanoamérica. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux-Novo Mundo Mundos Novos-New world New worlds*.

Rougier, M. (2012). *La economía del Peronismo: Una perspectiva histórica.* Sudamericana.

Rougier, M., & Fiszbein, M. (2006). *La frustración de un proyecto económico. El gobierno peronista de 1973-1976*. Ediciones Manantial.

Rougier, M., & Stawski, M. (2014). Un programa que" no puede conformar a todos": economía y burocracia en los años finales del primer peronismo. *América Latina en la historia económica*, *21*(1), 174–199.

Sanz Cerbino, G. S., & Baudino, V. (2013). *El tercer gobierno de Perón y la fractura de la clase dominante.*

Sanz Cerbino, G. S., & Lissandrello, G. (2018). El programa de liberación nacional en la Argentina de los’ 70: la convergencia entre Montoneros y la Confederación General Económica (CGE). *Conflicto Social*, *11*(19), 100–132.

Seoane, M. (2018). *El burgués maldito*. Random Pengüin House.

Servetto, A. (2011). *73/76. El gobierno peronista contra las provincias montoneras*. Siglo XXI.

Sidicaro, R. (2002). *Los tres peronismos: Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*. Siglo XXI Editores.

Silva Fernández Aldana, M. (s. f.). *Discursos, representaciones sociales y roles de las mujeres en el agro en los primeros gobiernos peronistas (1943-1955)*. Recuperado 8 de octubre de 2020, de http://www.aacademica.org.

Stawski, M. (2012). Del equipo de asalto a la consolidación: Estado, elites y economía durante el primer peronismo, 1946-1955. En *Plotkin, M. y Zimmermann, E. Saberes de Estado* (Vol. 2).

Torre. (1983). *Los sindicatos en el gobierno:1973-1976*. Centro Editor de América Latina.

Vitto, C. (2012). Plan económico del tercer gobierno peronista: Gestión de Gelbard (1973-1974). *Problemas del desarrollo*, *43*(171), 111–134. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\_arttext&pid=S0301-70362012000400006

Yazbek, S. (2015). *YPF y la política petrolera de los gobiernos peronistas entre 1973 y 1976.* Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.

1. En octubre se reconvertiría en Ministerio de Economía, incorporando formalmente nuevas funciones. A lo largo de la ponencia priorizaremos el análisis de esta última disposición de la cartera, que fue la diseñada por el gobierno peronista. [↑](#footnote-ref-1)
2. En términos de ingresos, el ACN establecía un aumento de suma fija para los asalariados de $200, que representaba un 20% del salario mínimo y un 14% del salario medio. Definía también aumentos en las tarifas de servicios públicos, retrotraía en determinados rubros aumentos preventivos que las empresas habían aplicado en los días previos, y, luego de reajustar precios en línea con los aumentos tarifarios, los congelaba por dos años. De manera expresa, solo mencionaba una corrección de los sueldos, atada a la productividad, prevista para el 1 de junio de 1974, mientras establecía aumentos para las jubilaciones, pensiones y el salario familiar (“Acta de Compromiso Nacional”, 1973; Di Tella, 1986; Rougier & Fiszbein, 2006; Vitto, 2012). [↑](#footnote-ref-2)
3. Aunque la versión que se incorporó al Plan Trienal aparece fechada el 30 de mayo (“Acta de Compromiso Nacional”, p.304), el relevamiento hemerográfico muestra que el anuncio fue el 8 de junio, y que en los primeros días de ese mes todavía existían negociaciones entre los actores involucrados respecto de la redacción final del documento (“Continúa aún en estudio…”, 1973; “Principales proposiciones…”, 1973). [↑](#footnote-ref-3)
4. A partir de ahora, “Coincidencias programáticas”. Fue un documento impulsado por la CGE y la CGT que constaba de veintidós puntos de política económica presentados el 7 de diciembre de 1972. Entre los adherentes figuraban 24 organizaciones políticas, encabezadas por el Movimiento Nacional Justicialista y la Unión Cívica Radical. En marzo, la CGE presentó un documento con propuestas similares bajo el título *Sugerencias del empresariado nacional para un programa de gobierno.* [↑](#footnote-ref-4)
5. La entrevista más relevante a lo largo del trabajo es la que se le realizó a Carlos Leyba en abril de 2019, subsecretario de Coordinación y Programación durante el período analizado. Tanto en este caso, como en los testimonios autobiográficos se atiende a la precaución de abordar la complejidad de la memoria: a lo largo del trabajo tomamos en cuenta las dificultades que presenta la apelación al relato de los actores cuando se realizan investigaciones vinculadas con la historia reciente (James, 2004; Jelin, 2002). En el caso de los periódicos, se consultó las colecciones de *La Nación, Clarín, La Opinión, La Prensa, Noticias y El Litoral.* Como recaudo metodológico, procuramos tener para todos los días del período el relevamiento de al menos dos periódicos distintos. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bajo la influencia de las obras de Evans, investigaciones recientes han abordado diversas aristas de la realidad argentina a partir de estas categorías. Entre ellas podemos distinguir tres tipos fundamentales: las que se centran en la trayectoria de determinados funcionarios y su relación con grupos económicos (Donatello & Obradovich, 2020; Obradovich & Donatello, 2018); las que analizan el rol del Estado como actor que puede motorizar el desarrollo (Castellani, 2006; Castellani & Llanpart, 2012; García, 2018a), y aquellas que hacen foco en la implementación de políticas públicas específicas, evaluadas a partir de la relación entre los funcionarios ejecutantes y la sociedad civil (García, 2018b; Librandi & Di Marco, 2014). [↑](#footnote-ref-6)
7. Antes de que se sancionara la nueva Ley de Ministerios, los funcionarios fueron designados en cargos provisorios, pero atendiendo las mismas tareas que asumirían formalmente con la nueva norma en octubre de 1973. [↑](#footnote-ref-7)
8. Producto de estas disputas, fue asesinado José Rucci, y su lugar al frente de la CGT fue ocupado por Adelino Romero. [↑](#footnote-ref-8)
9. Adalbert Krieger Vasena había sido ministro de Economía entre 1957 y 1958, y de Economía y Trabajo entre 1967 y 1969. [↑](#footnote-ref-9)
10. Como parte de esta política, Giberti se enfrentó a las restricciones de los mercados europeos en materia de exportación de carnes. Por otro lado, impulsó una innovación en materia de granos: ante la mala calidad de las semillas de soja disponibles en el país en el período, gestionó la llegada de semillas de alta calidad de los Estados Unidos, trasladadas en aviones Hércules de la Fuerza Aérea para que pudieran ser sembradas a los pocos días de cosechadas (“Semillas de soja…”, 1973). [↑](#footnote-ref-10)
11. La propuesta constituía el inciso 13.2 de las “Coincidencias Programáticas” (*Plan Trienal*, 1973, p. 306). [↑](#footnote-ref-11)
12. Al reconstruir brevemente la trayectoria de Davié en este período surge un elemento relevante en relación con lo planteado sobre saberes técnicos y políticos. Mientras que ciertos datos los reconstruimos a partir de fuentes de diverso tipo, aquéllos que pudimos encontrar en la bibliografía académica aparecen fragmentados: los que refieren a su vida académica se encuentran en trabajos del campo del estudio de las universidades; mientras que los referidos a su rol como empresario y funcionario pueden encontrarse en trabajos de historia económica y política. Una primera impresión al respecto podría indicar que la estructuración de los campos académicos como compartimientos estancos tiende a constituirse en un obstáculo para reflexionar acerca de estos actores como una unidad no escindida, a pesar de sus prácticas en distintas esferas de la realidad social, o su multiposicionalidad (Boltanski, 1973). [↑](#footnote-ref-12)
13. Hasta que se sancionó la nueva Ley de Ministerios, su cargo formal fue subsecretario a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que se convirtió en secretaría con la nueva legislación, dependiendo de Gelbard. Al mismo tiempo era subsecretario interino de Energía. [↑](#footnote-ref-13)
14. Así se desprende de publicaciones oficiales del período (Ministerio de Obras Públicas, 1960). [↑](#footnote-ref-14)
15. Se puede verificar en https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/comision-ddhh/ministros-de-obras-publicas. [↑](#footnote-ref-15)
16. Caraballo (2007) recuerda que similar trayectoria a la de Savón tuvo Saúl Witis, pasando por el gobierno de Frondizi y el IIEF-CGE. Witis fue nombrado Subsecretario de Política y Administración Tributaria a través del Decreto 146/1973. [↑](#footnote-ref-16)
17. Leyba se refiere a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972. [↑](#footnote-ref-17)
18. De todas formas, podemos matizar estas apreciaciones ya que, como vimos en el caso de la Secretaría de Desarrollo Industrial, hubo casos puntuales en los que se aplicó la Ley de Prescindibilidad, aunque, vale aclarar, no era un área que dependiera directamente de Leyba. [↑](#footnote-ref-18)
19. En estos puntos coinciden los testimonios de Leyba (2019) y Lavagna (2005). Según sus relatos, colaboraron en esa tarea con el sociólogo Roberto Carri, que más tarde se incorporaría a Montoneros, y sería desaparecido por la dictadura militar. Lavagna, por su parte, iniciaba una carrera política prolífica, que se coronaría con el cargo de ministro de Economía entre 2002 y 2005. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lumi había empezado su trayectoria como empleado público de carrera durante el primer peronismo, logrando ascensos, según sus palabras, “exclusivamente por méritos”, hasta alcanzar el rol de subsecretario de Hacienda en 1955. Luego de tres años alejado de la administración pública, el gobierno radical de Frondizi lo convocó con el cargo de secretario de Hacienda. A diferencia de otros funcionarios, también ocupó importantes cargos durante la autodenominada “Revolución Argentina”: fue ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires en 1970, y presidente del Banco Provincia entre 1971 y 1973. Esta trayectoria le mereció críticas de sectores del peronismo (*Comisión Bicameral Investigadora Especial de Estudio Contrato Aluar-EN*, 1975; Flores, 2017). [↑](#footnote-ref-20)
21. Rafael Kohanoff (1925-2020) fue un ingeniero, empresario, y dirigente de la CGE, que alcanzaría la presidencia de la CGI, y en diciembre de 1973 fue designado al frente de la COPYME. Carlos Garber era abogado, y representaba a Gelbard en la empresa FATE (“El caso Gelbard”, 1973). Manuel Madanes era un empresario, miembro de la CGE, y socio de Gelbard en numerosos emprendimientos empresarios (“Argentina impotente”, 1973; Blejmar, 2019; Seoane, 2018). Finalmente, Ernesto Paenza también era dirigente de la CGE y fue designado en el BANADE como vicepresidente ejecutivo (“Argentina impotente”, 1973, p. 40). [↑](#footnote-ref-21)
22. Luego de un meteórico ascenso en su carrera como empleado público, en enero de 1949 Gómez Morales fue nombrado presidente del Banco Central y simultáneamente secretario de Finanzas, cartera que se convertiría en Ministerio al poco tiempo. En 1952 fue designado al frente de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos, que a partir de 1954 tuvo más poder que los propios ministerios, como encargada de la coordinación de las carteras relacionadas con la economía. Ese año fue nombrado ministro de Finanzas Miguel Revestido, que también había ascendido velozmente en el Estado desde su ingreso como funcionario en 1944, por concurso, a la Dirección de Tierras y Bosques. En 1952, con 31 años, Cafiero fue designado ministro de Comercio Exterior. En su caso, a partir de su militancia universitaria, había ingresado a la función pública con el peronismo, cumpliendo tareas en la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Cancillería, y la Embajada argentina en Washington (Belini, 2014; Garrido, 2022b; D. Pereyra & González Bollo, 2020; Rougier & Stawski, 2014; Stawski, 2012). [↑](#footnote-ref-22)
23. En su autobiografía, Cafiero comparte esta lectura sobre la figura de Gómez Morales (Cafiero, 2011, p. 116). [↑](#footnote-ref-23)
24. Apreciaciones similares sobre estas tensiones se encuentran en la prensa de la época (“¿Cambios en Economía?”, 1974). [↑](#footnote-ref-24)
25. De acuerdo a los testimonios de Abal Medina, Cafiero, Caraballo, y la correspondencia entre Cafiero y Perón (Cafiero, 1973), el motivo de su caída en desgracia dentro del peronismo, y especialmente frente a Perón, fue una reunión que mantuvo con Lanusse, desobedeciendo órdenes directas del líder exiliado, en las que le había indicado no reunirse con militares (Cafiero, 2011; Abal Medina, 2005; Caraballo, 2007). [↑](#footnote-ref-25)